

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-8951-2021  
CARATULADO : HOTEL NIPPON S.A./ESTADO DE CHILE-  
CDE

**Santiago, uno de septiembre de dos mil veintitrés.**

**Vistos.**

Con fecha 11 de noviembre de 2021, folio 01, comparece don Rodrigo Andrés Zarhi Hernández, abogado, domiciliado en Av. Presidente Kennedy N° 9070, oficina 1501, comuna de Vitacura, en representación de **Hotel Nippon S.A.**, sociedad del giro de su denominación, representada legalmente por doña Patricia del Carmen Vidal Benavides, también domiciliada en Av. Presidente Kennedy N° 9070, oficina 1501, comuna de Vitacura, quien interpone demanda de cumplimiento de contrato en contra del **Fisco de Chile**, representado legalmente por el Consejo de Defensa del Estado, y éste a su vez por don Juan Antonio Peribonio Poduje, domiciliado en calle Agustinas N° 1225, piso 4, comuna de Santiago, en base a los argumentos de hecho y derecho que expone.

Con fecha 10 de diciembre de 2021, folio 12, se notificó la demanda de conformidad al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

Con fecha 29 de diciembre de 2021, folio 13, la parte demandada interpuso excepciones dilatorias, las cuales fueron acogidas parcialmente con fecha 11 de febrero de 2022, folio 08, en el cuaderno de excepciones.

Con fecha 28 de febrero de 2022, folio 20, se tuvo por contestada la demanda, dentro del término legal, confiriéndose traslado para la réplica.

Con fecha 14 de marzo de 2022, folio 22, se tuvo por evacuado el trámite de la réplica, dentro del término legal, confiriéndose traslado para la dúplica.

Con fecha 25 de marzo de 2022, folio 24, se tuvo por evacuado el trámite de la dúplica, dentro del término legal, acto seguido, se recibió la causa a prueba, estableciéndose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, allí señalados, resolución notificada a la parte demandante, personalmente, el día 26 de abril de 2022, folio 26; y a la parte demandada, por cédula, el día 26 de abril de 2022, folio 25.

Luego, con fecha 16 de mayo de 2022, folio 34, consta el hecho de haberse acogido parcialmente recurso de reposición en contra de la resolución que recibió la causa a prueba, fijándose y modificando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los allí señalados, sobre los cuales recayó la rendida en autos.

Con fecha 10 de noviembre de 2022, folio 95, se citó a las partes oír sentencia.

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**



**I.- EN CUANTO A LAS TACHAS.**

**PRIMERO:** Que con fecha 26 de agosto de 2022, folio 73, la parte demandada formula tacha respecto del testigo de la demandante, don **Felipe Andrés Jorge Pardo Alarcón**, del N° 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.

Expone que el testigo ha señalado que mantiene una relación contractual con la empresa Bta Consultores SpA., desempeñándose como socio desde el año 2017. Agrega que dicha consultora presta servicios a la demandante, desempeñando labores de contabilidad desde el año 2019. Señala que el testigo emite una factura mensual por prestación de servicios, por lo que tiene un interés pecuniario en el pleito. Además, indica que nada obsta a que tenga participación societaria en la referida consultora, por cuanto sus funciones son las de gerencia, resultando lógico que con su declaración favorezca a uno de sus clientes;

**SEGUNDO:** Que, la parte demandante, al evacuar el traslado conferido señala que: como exige la norma, el testigo debe manifestar un interés directo o indirecto en el resultado del juicio, lo que no consta, por cuanto de manera conteste la doctrina y jurisprudencia, señalan que no basta un interés meramente moral, sino que debe ser de carácter pecuniario. Señala que de los dichos del testigo no se expresa o infiere la obtención de una ventaja económica, debiendo ser el interés económico, concreto y actual, el cual debe causar un impacto en su declaración que provoque imparcialidad. Agrega que el testigo ha señalado que su remuneración está sujeta a un contrato de prestación de servicios a una empresa externa, ajena al juicio, de la cual ha dicho no tener participación;

**TERCERO:** Que el testigo al responder las preguntas de tacha, indica que: lo presenta don Guillermo Bertini; que su relación con él es que ambos son contadores; que su empresa externa le presta servicios de contabilidad al sr. Bertini, desde el 2019; que el sr. Bertini es hijo de la dueña del hotel; que le presta servicios al demandante; que le emite una factura mensual; que trabaja para Bta Consultores SpA., de la cual era socio desde el 2017 al 2021, y gerente de contabilidad, desde el 2021 a la fecha; que el monto de facturación de Bta Consultores SpA., a la demandante, es aproximado, después del estallido, a \$300.000; que el monto aproximado de facturación mensual de Bta Consultores SpA., es de \$15.000.000, mensuales, y el triple en el mes de abril;

**CUARTO:** Que, de acuerdo al artículo 358 del Código de Procedimiento Civil: Son también inhábiles para declarar: 6° Los que a juicio del tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto.

Que de lo señalado por el testigo no se permite colegir parcialidad en su declaración, toda vez que ha expuesto que se desempeña en una empresa externa que



presta servicios de contabilidad de forma esporádica a la demandante, sin que dicha circunstancia configure el interés pecuniario que necesita la norma.

Por estas consideraciones, **se rechaza, sin costas**, la tachada deducida por el demandado Fisco de Chile, en contra del testigo **sr. Felipe Andrés Jorge Pardo Alarcón**, presentado por la parte demandante, Hotel Nippón S.A.;

**QUINTO:** Que con fecha 26 de agosto de 2022, folio 73, la parte demandada formula tachada respecto de la testigo de la demandante, doña **Ingrid Eliana Leiva Jelvez**, del N° 5 y N° 6, del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.

Expone que la testigo ha señalado que mantuvo una relación laboral con la demandante hace más de 10 años, siendo finiquitada en marzo de 2022, siendo imposible para la demandante efectuar el pago total del finiquito de la testigo, por problemas económicos derivados del estallido y la pandemia. Luego, argumenta que la testigo ha declarado elementos propios exigidos por la Dirección del Trabajo y la normativa civil, puesto que presta servicios personales a la demandante, percibiendo una contraprestación de \$800.000, previéndose que el grueso de sus ingresos provienen del Hotel Nippón. Señala que es clara la dependencia de la testigo con la demandante.

En forma subsidiaria formula la tachada contemplada en el numeral 6° del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.

Señala que la testigo carece de imparcialidad por tener un interés actual y pecuniario, atendido a que señaló que el demandante no estaría en condiciones de pagar el total de sus prestaciones. Luego, indica que dado el trabajo desempeñado por la testigo para el actor, en especial sus funciones como jefa de ventas, se verían empañadas de no resultar el juicio favorable para el demandante. Comenta que la testigo señaló haber colaborado con la cobranza efectuada al Ministerio de Salud;

**SEXTO:** Que, la parte demandante, al evacuar el traslado conferido señala que: en cuanto al trabajador, se refiere al testigo que mantenga un vínculo de subordinación o dependencia con el que lo presenta a declarar, requiriendo los elementos de dependencia, habitualidad y retribución. Arguye que la testigo señaló que actualmente no mantiene contrato de trabajo, y respondió de forma negativa al cumplimiento de horario laboral y órdenes directas, habiendo sido finiquitada en marzo y desempeñándose *freelance*. Dispone que si bien la testigo señaló recibir una remuneración, no cumple con el criterio de la habitualidad.

En cuanto a la tachada subsidiaria, señala que la testigo no ha manifestado tener ningún tipo de interés directo o indirecto, indicando que ella narraría los hechos tal cual sucedieron. Comenta que pese a que la testigo declaró que el demandante no habría estado en condiciones de pagar su finiquito completo, indicó que eso fue



acordado por ambas partes y ello se encontraría cerrado. Respecto de la colaboración en la cobranza al Ministerio de Salud, no vislumbra un interés vigente en el resultado del juicio, pues esa situación ocurrió en el pasado cuando ella trabajaba, vínculo que hoy no se mantiene;

**SÉPTIMO:** Que la testigo al responder las preguntas de tacha, refiere que: la parte que la presentó es Hotel Nippón, con la cual mantuvo una relación laboral desde hace 10 años; que fue finiquitada en marzo de 2022 y que ahora realiza ventas *freelance* para hoteles, entre ellos, el Hotel Nippón. Señala que empezó hace poco, estando en contacto con tres hoteles, Hotel Fundador, Novapark y Nippón. Indica que recibe ingresos variables de Nippón, porque los tres hoteles son de distinta categoría, tienen tarifas diferentes, por lo que en un mes puede ganar \$100.000 y en otro \$800.000, por distintas épocas o temporadas; que en el último trimestre percibió por la demandante \$900.000, aproximadamente; que no cumple horario de trabajo; que no recibe órdenes directas; que cuando trabajaba para Nippón su jefatura era don Guillermo Bertini. Señala que tuvo una reunión previa a la audiencia, no presencial, con la abogada de la causa, quien la llamó para informarle las etapas del juicio y en qué consistían las preguntas de tacha. Indica que se enteró del juicio porque estaba colaborando con la cobranza de facturas pendientes del Ministerio de Salud, y que en su momento, la sra. Patricia Vidal, le pidió no insistir. Refiere que no mantiene contrato escrito con el Hotel Nippón; que terminó su relación laboral con el hotel, porque ella jubiló, con proyectos y estaba estresada de estar con un empleador, no con el hotel, sino en general. Expone que no recuerda la causal de término de contrato con Nippón, que llegaron a un acuerdo, sobre el que negociaron, que la entendieron, y le explicaron que no estaban en condiciones de pagarle el finiquito por todos los años. Indica que ella cree que no le pagaron, porque el hotel está ubicado en Plaza Italia, quedando durante el estallido, con cero ventas, y luego por la pandemia, siendo el negocio la residencia sanitaria. Señala que actualmente negocia sus servicios con la sra. Patricia Vidal; que el Hotel Fundador le ha pagado \$200.000 en el último trimestre, y del Hotel Novapark no ha recibido nada;

**OCTAVO:** Que, de acuerdo al artículo 358 del Código de Procedimiento Civil: Son también inhábiles para declarar: 5°. Los trabajadores y labradores dependientes de la persona que exige su testimonio; y 6°. Los que a juicio del tribunal carezcan de la imparcialidad necesaria para declarar por tener en el pleito interés directo o indirecto.

En cuanto a la primera causal invocada, ella requiere que exista relación laboral con el demandante, marcada por la subordinación y dependencia de ese tipo de vínculos, lo que no se desprende del trato *freelance* al cual ha hecho referencia la testigo, ya que ello supone labores de carácter eventual, ocasionales, sin que se pueda



calificar como un nexo laboral, el que sin perjuicio, requiere un condicionamiento del testimonio, lo que de manera alguna, se observa de lo relatado.

Respecto de la segunda causal, la testigo ha manifestado que si bien hubo una relación laboral con el demandante, ésta se encuentra totalmente finiquitada, sin que exista deuda pendiente que solucionar, por lo que no se visualiza el interés pecuniario que necesita la norma para su estructura.

Por estas consideraciones, **se rechazan, sin costas**, las tachas deducidas por el demandado Fisco de Chile, en contra de la testigo **sra. Ingrid Eliana Leiva Jelvez**, presentada por la parte demandante, Hotel Nippon S.A.;

## **II.- EN CUANTO AL FONDO.**

**NOVENO:** Que, con fecha 11 de noviembre de 2021, folio 01, comparece don Rodrigo Andrés Zarhi Hernández, abogado, en representación de sociedad Hotel Nippon S.A., representada legalmente por doña Patricia del Carmen Vidal Benavides, quien interpone demanda de cumplimiento de contrato en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por el Consejo de Defensa del Estado, y éste a su vez por don Juan Antonio Peribonio Poduje, todos debidamente individualizados, en base a los argumentos de hecho y derecho que expone.

Refiere que con fecha 05 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud, dictó el Decreto Supremo N° 4, por medio del cual se decretó alerta sanitaria, en razón de la pandemia por el virus covid-19. Relata que por ello, el Ministerio de Salud debió acudir al apoyo del sector privado para hacer frente a la pandemia, gestionando un proceso de implementación de residencias sanitarias con distintos hoteles del país.

A propósito de lo anterior, explica que el Hotel Nippon S.A., fue uno de los tantos establecimientos de comercio que tuvo que reestructurarse, para constituirse de manera temporal en una residencia sanitaria. Agrega que el hotel se encuentra ubicado en la comuna de Santiago, para efectos de desarrollar su actividad comercial, destacando su ambiente tranquilo, grata atención, marcados por su cultura japonesa, todo ello siendo fundamental para ser convocado por el gobierno, para el plan de contención de la pandemia.

### **Acerca de la relación contractual de las partes.**

Expone que bajo el escenario descrito, comenzó a derivarse un gran número de personas (pacientes), al hotel de su representada, incluso antes de poder materializarse por escrito la contratación de los servicios.

Relata que con fecha 11 de mayo de 2020, lo anterior fue subsanado mediante la suscripción de un contrato por parte del Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y la sociedad Hotel Nippon S.A. Comenta que el contrato fue aprobado por resolución de la misma subsecretaría con fecha 19 de mayo de 2020, y cuya labor decía relación con poner a disposición de los pacientes de



bajo riesgo o con sospecha de contagio, habitaciones independientes para su aislamiento seguro.

Indica que el referido contrato impuso a su representada una serie de condiciones técnicas, entre ellas: que las habitaciones debían contar con baño privado; proveer servicio de alimentación a la habitación, incluyendo 4 comidas diarias, desayuno, almuerzo, once y cena; entregar 4 litros de agua embotellada diaria; proporcionar servicio de mucama a la habitación para el aseo periódico, requiriéndose cambiar la ropa de cama, toallas y el retiro de desechos; disponer del servicio de lavandería y proporcionar productos de aseo personal.

Expone que cada uno de los requerimientos fue cumplido a cabalidad por su representada, ajustándose a las características y condiciones impuestas en el contrato.

Señala que el Hotel Nippón prestó servicios como residencia sanitaria durante el periodo de marzo a junio de 2020, debiendo ser remunerado por una suma de \$241.746.120, por lo que consecuentemente, la subsecretaría emitió una orden de compra por dicha suma de dinero. Afirma que el precio sería pagado una vez que se emitiera la orden de compra, previa certificación del cumplimiento de los servicios prestados.

Argumenta que la certificación fue favorable, por cuanto la subsecretaría ordenó la emisión de una primera factura, por los servicios de marzo y abril de 2020, con el número 10370, por un monto total de \$92.791.440. Declara que esa factura fue íntegramente pagada por el demandado, validando su conformidad con los servicios prestados, aun cuando ello fue efectuado con casi un año de atraso.

Luego, manifiesta que su representada emitió la factura número 10374, por los servicios prestados por el mes de mayo de 2020, por un monto de \$75.698.280. Sin embargo, el demandado de manera repentina decidió dejar de autorizar los pagos, sin entregar justificación al hotel.

**Acerca de los intentos de Nippón para obtener respuesta del demandado.**

Alega que ante la negativa del demandado de pagar, el hotel decidió acudir a la Contraloría General de la República, por cuanto, las reiteradas comunicaciones dirigidas al Departamento de Finanzas y Presupuesto del Minsal, resultaron absolutamente infructuosas. Indica que la respuesta de la Contraloría, fue escueta e incomprensible, señalando que las certificaciones conformes por parte de la institución suman \$126.706.440, respaldo con el que se devengó la factura N° 10.370 y que se pagó el día 09 de marzo de 2021, y que la entidad solo enteraría los servicios efectivamente prestados.



Refiere que tan incomprensible es la respuesta de Contraloría, que el monto indicado no guarda relación con la factura y pago a que hace alusión, siendo los mismos por un monto inferior en más de \$30.000.000.

Describe que se tiene una primera factura, pagada con casi un año de retraso, por más de \$92.000.000, en circunstancias que la demandada reconoce haber validado un pago de \$126.000.000; luego, una segunda factura impaga por más de \$75.000.000; y luego, un saldo de más de \$70.000.000, que no ha podido ser facturada por su parte.

**Acerca de los perjuicios ocasionados a Hotel Nippón.**

Indica que el contrato y la orden de compra emitida por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, ascendía a un total de \$241.746.120. Explica que lo anterior es de relevancia, pues se acreditará que los servicios prestados superaron el valor inicial estimado por el demandado, llegando a un total de \$245.751.236. Señala que de ello, se emitió y pagó una factura por la suma de \$92.791.440; una segunda factura emitida y no pagada por la suma de \$75.698.280; y un tercer monto sin facturar de \$77.261.516, concluyendo una diferencia adeudada de \$152.959.796, más intereses y reajustes que correspondan.

Expone que Nippón partió hospedando a escasos 30 pacientes en el mes de marzo, para llegar a más de 100 en el mes de junio de 2020, quedando en evidencia la envergadura de los gastos que el hotel debió afrontar por el mayor número de pacientes, resultando un evidente perjuicio económico, puesto que no se estaban percibiendo los pagos de los servicios prestados, debiendo el hotel seguir cumpliendo con sus obligaciones. Arguye que el hotel financió con sus propios recursos el total de la operación, que en la práctica le correspondía asumir al Ministerio de Salud y que remuneró en parte, más de un año después.

Esgrime que, dada la naturaleza del contrato, Nippón se encontraba completamente impedido de recibir a más pasajeros, puesto que los servicios eran de carácter integral, por todas las habitaciones del hotel, excluyéndose cualquier posibilidad de recibir pasajeros distintos a los expresamente indicados por el Ministerio de Salud.

Finalmente, citando normas legales aplicables al caso, solicita tener por interpuesta demanda de cumplimiento forzado de contrato, en contra del Fisco de Chile, a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, debidamente representado por el Consejo de Defensa del Estado, y en definitiva, acogerla en todas sus partes, declarando: 1) que la demandada incumplió el contrato suscrito con Hotel Nippón S.A., con fecha 11 de mayo de 2020, en particular, su obligación de pagar el precio de las prestaciones realizadas por ésta; 2) ordenando se apremie a la demandada a cumplir con su obligación consistente en el pago de la



factura N° 10374, correspondiente al mes de mayo del año 2020, por la suma de \$75.698.280, junto con el pago de los servicios prestados en el mes de junio de 2020, por un valor de \$77.261.516; 3) ordenando que las cifras anteriores sean pagadas con intereses y reajustes; y 4) que se condene en costas a la demandada;

**DÉCIMO:** Que, con fecha 23 de febrero de 2022, folio 19, comparece doña Ernestina Ruth Israel Lopez, abogada procurador fiscal, del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, ambos con domicilio en calle Agustinas N° 1225, piso 4, comuna de Santiago, quien viene en contestar la demanda en base a los argumentos de hecho y derecho que señala en su escrito.

Expone que su parte controvierte expresamente la totalidad de los hechos aseverados en la demanda y las distintas acciones que dan origen a estos autos, así como las consecuencias jurídicas que la actora hace derivar, exceptuándose únicamente aquellos que se acepten expresamente en la contestación.

**Excepciones, alegaciones y defensas.**

**Contexto de la emergencia sanitaria y marco general de contratación en la pandemia covid-19.**

Establece que en razón de la propagación y consecuencias del virus covid-19, la O.M.S., declaró que el brote de coronavirus constituía una emergencia de salud pública, siendo necesario decretar alerta sanitaria por el periodo de un año, renovada por el 2021, en todo el territorio de la república para enfrentar la amenaza de salud pública.

Relata que se dotó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, de atribuciones extraordinarias para disponer, entre otras medidas, de la adquisición directa de bienes, servicios o equipamientos, necesarios para la urgencia, quedando liberada de los procedimientos de licitación, de conformidad a la letra c) del artículo 8 de la Ley N° 19.886, de compras públicas.

Comenta que una de las medidas sanitarias necesarias de adoptar, consistió en la contratación de servicios de residencias sanitarias, que permitía disponer de habitaciones para pacientes diagnosticados con covid-19 positivo, en condición de asintomáticos, que no requirieran hospitalización, como también personas con sospecha de contagio, que no contaran con vivienda para su aislamiento.

Luego, explica que mediante resolución exenta N° 209, de 25 de marzo de 2020, de la Subsecretaría de Salud Pública, se fijó el precio máximo del arrendamiento de inmuebles, con el objeto de cumplir con las medidas para hacer frente a la pandemia, en 0,2 unidades de fomento, por metro cuadrado efectivamente utilizado, lo que al momento de cotizar la prestación del servicio de residencia sanitaria, se ha tenido en cuenta para efectos de convertir el precio.





Refiere que al demandante se le pagó a su plena conformidad, la suma de \$92.791.440, con I.V.A., incluido, por concepto de utilización efectiva de las habitaciones.

**Caso del Hotel Nippón S.A.**

Expone que el valor del metro cuadrado efectivamente utilizado, permitía tener un referente atractivo para los oferentes y que admitía no especular con una suma eventual y no proyectable de ocupación, que en definitiva, pudiese no cumplirse, lo que daría lugar a un pago sin justificación por el Fisco de Chile. Indica que la lógica contemplaba un equilibrio de las prestaciones de ambas partes, por un lado, el particular, tenía una expectativa de ocupación, y por su parte, el Fisco de Chile, solo destinaba recursos a personas en aislamiento real, en la medida que se necesitara.

Considera que pretender que se habría asegurado el 100% de ocupación de las habitaciones del inmueble, resulta insostenible, sin atender el uso efectivo para fines sanitarios. Agrega que mediante oficio N° 1675, de fecha 03 de junio de 2020, del Subsecretario de Redes Asistenciales, dirigido a los directores de servicios de salud, reiteró que sólo se pagaría la ocupación efectiva de los inmuebles destinados a residencia sanitaria.

**Legislación aplicable.**

Determina aplicable la Ley N° 19.880; el decreto supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886; el decreto supremo N° 4, de 2020, del Ministerio de Salud; y la resolución exenta N° 209, del Ministerio de Salud, de 25 de marzo de 2020.

Argumenta que el decreto supremo N° 4, de 2020, del Ministerio de Salud, sólo libera a la autoridad de solemnidades de una licitación pública, pero los tratos directos continúan regidos por la Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. Considera que el trato directo no transforma a la contratación pública en contratación entre particulares regidas por el Código Civil, siendo aplicables los principios de la Ley de Contratación Pública, a saber: principio de la prevalencia del interés público sobre el privado; y de no discriminación entre oferentes.

Arguye que sin perjuicio de lo expuesto, en especial lo referente a la legislación aplicable, atendido a que el actor funda la demanda en la presunta responsabilidad contractual del derecho privado, hace presente que los efectos contractuales, se encuentran limitados con las disposiciones dictadas por la autoridad y sus potestades, resultando imposible que el demandante no conociera la resolución N° 209, que expresamente estableció pagos por superficies efectivamente utilizadas.

**El cumplimiento de la obligación de pago demandada.**



Esgrime que en el contrato, en su cláusula cuarta, se estipula como precio máximo a pagar, por los servicios de residencia sanitaria, por el periodo acordado, la suma total de \$241.746.120, con IVA incluido.

Señala que el monto que pretende cubrir el demandante es superior al acordado en el contrato. Indica que la orden de facturación corresponde a la N° 132, del 23 de septiembre de 2020, que refleja un total de \$156.483.810, con IVA incluido.

Determina que la factura N° 10370, por \$92.721.440, de fecha 20 de mayo de 2020, fue pagada con fecha 09 de marzo de 2021, pero la factura N° 10374, por \$75.698.280, de fecha 01 de junio de 2020, no fue pagada, porque por sí sola, superaría el monto por el cual se consideran como saldo a pagar, los servicios realmente prestados por la demandante.

Indica que lo anterior ocurrió por la inobservancia de lo acordado, por la demandante al emitir facturas anticipadamente y fuera del procedimiento acordado. Considera que el incumplimiento del contrato, también afecta la forma de cumplir el contrato por la demandante.

Relata que con la intención de pagar los servicios realmente prestados, la administración solicitó una nota de crédito y que se emitieran las facturas que reflejaran el monto a pagar según lo contratado. Señala que la demandante no accedió, aduciendo efectos tributarios nocivos para ella que no quería asumir, a pesar de que el incumplimiento del procedimiento acordado para la facturación y determinación del monto a pagar habría provocado dichos efectos nocivos. Considera que ese fue el fundamento de la respuesta de la Contraloría General de la República, contenido en el oficio E106257 / 2021, que en la demanda se dice no comprender.

**Improcedencia del pago de reajustes e intereses.**

Arguye que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia acoja la demanda, establezca la obligación y se encuentre firme o ejecutoriada. Determina que mientras no exista sentencia firme, a ninguna obligación se puede aplicar reajuste, pues el contrato de origen no acordó tal factor de corrección.

Finalmente, solicita tener por contestada la demanda civil, y en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar la acción deducida en todas sus partes, con costas;

**UNDÉCIMO:** Que, con fecha 07 de marzo de 2022, folio 21, la parte demandante evacúa el trámite de la réplica en base a las consideraciones expuestas en su presentación.

Expone que la demandada reconoce la existencia de un contrato suscrito con el demandante, y el contexto en que éste se llevó a cabo. Manifiesta que del relato de la demandada se destaca el carácter imprescindible de contar con servicios de



residencias sanitarias para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia. Estima que fue tan imprescindible y urgente el uso de dichos servicios, que la demandada no sólo no llevó un proceso de licitación pública, sino que incluso reconoció que el proceso se desarrolló y comenzó a ejecutarse antes de escriturar y formalizar el contrato mediante un acto de autoridad.

**Errores e imprecisiones de la contestación.**

**Legislación aplicable.**

El actor comenta que la demandada sólo se refiere a los principios de prevalencia del interés público y de no discriminación entre los oferentes, y que ellos no han sido transgredidos, por cuanto el contrato se debió al apoyo privado prestado al servicio de interés público, sin que hubiese mediado licitación, sino contratación directa. Considera que lo anterior es importante destacarlo, por cuanto se omite que la Ley N° 19.886, dispone que las normas aplicables a la licitación pública y a la licitación privada, se aplicarán al trato o contratación directa, en todo aquello que atendida la naturaleza del trato o contratación directa sea procedente.

Arguye que la existencia de principios propios de la actuación administrativa, no excluye la aplicación de ciertos principios de la legislación civil, por constituir principios generales del derecho. Estima que la parte demandada ha vulnerado el principio de la buena fe, inspirador del desarrollo de todo contrato, y cita como fundamento el dictamen N° 16.238, del año 2007, de la Contraloría General de la República.

**La contraria pretende desnaturalizar los servicios requeridos por la autoridad.**

Estima que el demandado insinúa que el contrato de autos respondió a un negocio muy interesante, como si ello hubiese significado percibir grandes beneficios. Considera que lo anterior es una falacia, pues ello se contradice en forma absoluta con la realidad. Reitera que no fue un negocio, sino que el Fisco fue quien debió recurrir a la ayuda privada para hacer frente a los efectos de la pandemia, y que Nippón, prestó su colaboración para mitigar la emergencia sanitaria, financiando con recursos propios el funcionamiento del hotel y la atención de pasajeros Covid.

Argumenta que de haber sido un negocio, su parte hubiese recibido ingresos claramente superiores, conforme los precios cobrados en un escenario de funcionamiento habitual para el hotel, lo que estaba vetado, por cuanto existía norma de orden público que fijaba los parámetros máximos para el cobro.

**La demandada no ha cumplido con la obligación de pago por su sola desidia.**

Esgrime que la demandada solo realiza una mera insinuación al respecto, sin detenerse a configurar el incumplimiento como tal, ni tampoco a accionar de manera



alguna contra su representada, por lo que aparece incomprensible su defensa. Señala que la demandada ha dicho que la subsecretaría sólo pagó la primera de las facturas emitidas por Nippón, mientras que la segunda no fue pagada porque superaría el monto del contrato. Argumenta que los documentos aportados al proceso desmienten de inmediato y tajantemente tal aseveración, por cuanto ambas facturas fueron acompañadas a la demanda.

Alega que si se considera sólo la primera de las facturas, que si fue pagada, el Fisco ni siquiera habría remunerado el 40% del valor del contrato, en base a los servicios efectivamente prestados. Luego, si se considera la primera y segunda factura, emitida y no pagada, el Fisco aún adeudaría a Nippón, más de \$70.000.000.

Estima que es evidente que la afirmación de la demandada parece desprovista de fundamento. Agrega que cuando los requerimientos de servicios fueron urgentes, Nippón debió comenzar a prestarlos y financiarlos sin que se le otorgara ninguna garantía, puesto que no había contrato escrito que la respaldare. Al respecto, dispone que la Contraloría General de la República, ha hecho aplicable otra institución propia de la regulación civil, cual es, el principio del enriquecimiento sin causa. Comenta que el Fisco se está enriqueciendo injustificadamente a costa del no pago de los servicios que persiste en no pagar, a casi dos años de haber sido íntegramente prestados y financiados por Nippón.

Describe que de haberse estimado que Nippón no prestó los servicios en la manera comprometida, el contrato entregaba herramientas para haberlo hecho presente de manera oportuna, lo que no ocurrió, por cuanto Nippón cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales.

Alega que la demandada tenía facultades para dar cuenta del incumplimiento de Nippón, por los servicios que se obligó a prestar entre marzo y junio, lo que jamás se realizó, demostrando que el hotel dio íntegro y cabal cumplimiento a las obligaciones del contrato, siendo procedente que el Fisco haga lo propio, dando cumplimiento al pago de la totalidad de los servicios prestados.

#### **Reconocimientos expresos del Fisco de Chile.**

Manifiesta que la demandada reconoce que debe remunerar los servicios efectivamente prestados por Nippón. Considera que el hotel no ha pretendido cobrar el 100% de ocupación, sin sustento en la realidad, puesto que en tal caso la facturación de cada mes habría sido idéntica, lo que no es efectivo.

Señala que la facturación cursada o pendiente de cada mes, asciende a distintas sumas de dinero, puesto que están asociadas al nivel de ocupación de habitaciones por el periodo respectivo. Dispone que ello es coherente con el hecho público y notorio de que los primeros meses de pandemia, fueron los más crudos,



viviéndose un crecimiento exponencial de los casos de mayo a junio, que serían los periodos adeudados.

Considera que el Fisco de Chile, reconoce la existencia del contrato y que los servicios fueron prestados por Nippón, sin embargo no entrega justificación plausible para dejar de pagar los mismos, más que alegaciones dilatorias carentes de fundamentos.

Finalmente, solicita tener por evacuado el trámite de la réplica en los términos planteados;

**DUODÉCIMO:** Que, con fecha 21 de marzo de 2022, folio 23, el Fisco de Chile evacúa el trámite de la dúplica, en base a los argumentos señalados en su presentación.

Reitera todas las alegaciones, excepciones y defensas planteadas, así como la controversia total de los hechos, solicitando el rechazo de la acción deducida.

Hace presente que su parte reconoce la existencia del contrato, por cuanto determina los servicios, el pago, el objetivo y el procedimiento a cumplir por las partes. Refiere que por otro lado, el contexto en el que se llevó a cabo se encuentra en el mismo contrato y en la resolución exenta N° 270 que aprobó los términos de referencia, la urgencia, autorización y regularización de recurrir a la modalidad de trato directo para la contratación de un servicio de residencia sanitaria, y que aprobó el correspondiente contrato con Hotel Nippón S.A., emitida por la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud.

Señala que donde también hay concordancia, aunque no sea un hecho propiamente tal, es que el Fisco debe remunerar los servicios efectivamente pactados, sin embargo, dicha concordancia no considera lo señalado en la réplica, en cuanto a que eso es exactamente lo que se cobra.

Argumenta que en la orden de facturación N° 132, emitida por la Unidad de Control de Egresos del Ministerio, se encuentran determinados los servicios efectivamente prestados y reconocidos por las partes, ascendiendo a un total de \$158.483.810 (sic), y no lo pretendido por Hotel Nippón, esto es, lo ya pagado, más lo que se cobra por la factura N° 10374, por \$75.698.280, y los supuestos servicios del mes de junio de 2020, por \$77.261.516, sumas que hacen un total de \$246.021.236. Lo anterior, a pesar de que la cláusula cuarta del contrato señala que el Ministerio pagará como precio máximo, por los servicios de residencia sanitaria y por el periodo acordado, la suma total con IVA. Incluido, de \$241.746.120.

Que por lo anterior no es posible acceder al monto pretendido por el actor, por cuanto es superior al pactado en el contrato. Indica que el pago debe corresponder al servicio efectivamente prestado, por ello, el contrato reguló el efecto que el monto a facturar debía encontrarse de acuerdo a la orden de facturación que



el Ministerio confeccionaría, según los informes de ocupación realizados. Señala que la orden es la N° 132, del día 23 de septiembre de 2020, que refleja un total a pagar con IVA incluido de \$156.483.810. Afirma que por ello, la factura N° 10370, por \$92.721.440 (sic), de fecha 20 de mayo de 2020, fue pagada con fecha 09 de marzo de 2021, pero la factura N° 10374, por \$75.698.280, de fecha 01 de junio de 2020, no fue pagada, porque por sí sola, supera el monto como saldo a pagar.

Luego, indica que sin perjuicio de lo anterior, con la intención de pagar los servicios efectivamente prestados, la administración solicitó una nota de crédito, y que se remitieran las facturas que reflejaran el monto a pagar, pero que la demandante no accedió aduciendo efectos tributarios nocivos para ella, que no quería asumir.

Concluye señalando que el Fisco de Chile, reconoce adeudar por la totalidad de los servicios contratados y prestados \$156.483.810, IVA incluido, de los cuales ya ha pagado \$92.721.440 (sic). Manifiesta que el saldo de \$63.762.370 (sic), no ha podido ser pagado por falta de presentación de facturas emitidas adecuadamente por los servicios prestados, según lo acordado en la cláusula cuarta y quinta del convenio de prestación de servicios de residencia sanitaria.

Con ello, solicita tener por evacuado el trámite de la dúplica en los términos expuestos;

**DÉCIMO TERCERO:** Que, con fecha 25 de marzo de 2022, folio 24, se recibió la causa a prueba, estableciéndose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, allí señalados, resolución notificada a la parte demandante, personalmente, el día 26 de abril de 2022, folio 26; y a la parte demandada, por cédula, el día 26 de abril de 2022, folio 25.

Luego, con fecha 16 de mayo de 2022, folio 34, consta el hecho de haberse acogido parcialmente recurso de reposición en contra de la resolución que recibió la causa a prueba, fijándose y modificando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los allí señalados, sobre los cuales recayó la rendida en autos;

**DÉCIMO CUARTO:** Que, con la finalidad de acreditar sus dichos, la parte demandante acompañó la siguiente prueba documental:

1.- Convenio prestación de servicios residencia sanitaria, de fecha 11 de mayo de 2020, entre el Ministerio de Salud y Hotel Nippón S.A.;

2.- Resolución exenta N° 270, de fecha 19 de mayo de 2020, Santiago, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, aprueba términos de referencia, califica urgencia, autoriza y regulariza recurrir a la modalidad de trato directo para la contratación de un servicio de residencia sanitaria, y aprueba contrato con Hotel Nippón S.A.;

3.- Orden de compra N° 4127-304-SE20, de fecha 19 de mayo de 2020, demandante: Subsecretaría de Redes Asistenciales, Rut: 61.975.700-9, para: Hotel



Nippón S.A., Rut: 96.587.150-0, por el servicio código 90111501, 36 habitaciones por 99 noches, por un valor unitario de \$57.000, por un total con IVA de \$241.746.120;

4.- Factura electrónica N° 10370, de fecha 20 de mayo de 2020, de Hotel Nippón S.A., para Subsecretaría de Redes Asistenciales, descripción: meses de mayo y abril de 2020, por un valor con IVA de \$92.791.440;

5.- Factura electrónica N° 10374, de fecha 01 de junio de 2020, de Hotel Nippón S.A., para Subsecretaría de Redes Asistenciales, descripción: mes de mayo de 2020, por un valor con IVA de \$75.698.280;

6.- Oficio N° E106257 / 2021, sobre estado de observancia de lo ordenado en oficio N° E88363, de 2021, emitido por la Contraloría General de la República;

7.- Copia de inscripción de fojas 19231 número 9605, correspondiente al Registro de Comercio del año 1990, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago;

8.- Copia de escritura pública de fecha 26 de septiembre de 2021, repertorio N° 2378 – 2021, ante la Notario Público, doña Marcela Andrea Medina Ricci, de mandato judicial de Hotel Nippón S.A., a Rodrigo Andrés Zarhi Hernández y otra;

9.- Certificado de título de abogado, de fecha 16 de junio de 2021, emitido por la Excelentísima Corte Suprema, respecto de don Rodrigo Andrés Zarhi Hernández;

10.- Certificado de título de abogada, de fecha 16 de junio de 2021, emitido por la Excelentísima Corte Suprema, respecto de doña Alejandra Angélica Barrera Araya;

11.- Comprobante de solicitud N° 1603156, emitido por el Ministerio de Salud, con fecha 04 de noviembre de 2021;

12.- Memorándum INPR2021 – 48276, oirs N° 1603156, de fecha 16 de mayo de 2022, de don Jonathan Andrés Brunet Urra, encargado de Unidad de Compras, para doña Patricia Vidal Benavides;

13.- Correo electrónico de cuenta recepción@hotenippon.cl, para residencias sanitarias minsal, residencias sanitarias, Guillermo Bertiny Vidal, Yuher Barrios, Atilio Barbie, de fecha 24 de junio de 2020;

14.- Tabla de fecha 24 de junio de 2020, titulada *rooming list*;

15.- Correo electrónico de cuenta recepción@hotenippon.cl, para residencias sanitarias minsal, residencias sanitarias, Guillermo Bertiny Vidal, Yuher Barrios, Atilio Barbie, de fecha 25 de junio de 2020;

16.- Tabla de fecha 25 de junio de 2020, titulada *rooming list*;

17.- Correo electrónico de cuenta recepción@hotenippon.cl, para residencias sanitarias minsal, residencias sanitarias, Guillermo Bertiny Vidal, Yuher Barrios, Atilio Barbie, de fecha 26 de junio de 2020;

18.- Tabla de fecha 26 de junio de 2020, titulada *rooming list*;



19.- Correo electrónico de cuenta recepción@hotenippon.cl, para residencias sanitarias minsal, residencias sanitarias, Guillermo Bertiny Vidal, Yuher Barrios, Atilio Barbie, de fecha 27 de junio de 2020;

20.- Tabla de fecha 27 de junio de 2020, titulada *rooming list*;

21.- Correo electrónico de cuenta recepción@hotenippon.cl, para residencias sanitarias minsal, residencias sanitarias, Guillermo Bertiny Vidal, Yuher Barrios, Atilio Barbie, de fecha 28 de junio de 2020;

22.- Tabla de fecha 28 de junio de 2020, titulada *rooming list*;

23.- Correo electrónico de cuenta recepción@hotenippon.cl, para residencias sanitarias minsal, residencias sanitarias, Guillermo Bertiny Vidal, Yuher Barrios, Atilio Barbie, de fecha 29 de junio de 2020;

24.- Tabla de fecha 29 de junio de 2020, titulada *rooming list*;

25.- Correo electrónico de cuenta recepción@hotenippon.cl, para residencias sanitarias minsal, residencias sanitarias, Guillermo Bertiny Vidal, Yuher Barrios, Atilio Barbie, de fecha 30 de junio de 2020;

26.- Tabla de fecha 30 de junio de 2020, titulada *rooming list*;

27.- Cadena de correos electrónicos entre Gonzalo Javier Judikis Gallardo, Ingrid Leiva, Guillermo Bertiny, Patricia Vidal, Recepción Hotel Nippón, Atilio Barbieri, de fecha 26 de junio de 2020;

28.- Tabla con indicación de servicio de salud, residencia, dirección, número de habitaciones totales, ocupadas, bloqueadas, disponibles, capacidad máxima de usuarios, cupos disponibles, número de habitaciones reservadas;

29.- Cadena de correos electrónicos entre Pia Venegas Araneda, Patricio Quiroga, gbertiny@hotelnippon.cl, ngonzalez@rq.cl, giovanniyra@gmail.com, Sebastian.a.fernandez.o@gmail.com; msirvent@plazasanfrancisco.cl;

recepcion@hoteldiegodevelazquez.com; g.comercialimperio@gmail.com;

jose.793@gmail.com; jose.793@gmail.com;

zunigama84@gmail.com;natalycontreraszamudio@gmail.com; cvilo1991@gmail.com;

taotesavedra@gmail.com; ccgallyas@uc.cl; caros.catalina@gmail.com;

jrodriguez@rq.cl; dacarlo@rq.cl; rgomez@rq.cl; losleones@rq.cl;

mcancinov@gmail.com; mcancinov@gmail.com; soledad.gutierrez@redsalud.gov.cl

(sic) ;patricio.quiroga@redsalud.gov.cl (sic); glenda.riquelme@redsalud.gov.cl (sic);

anamaria.hevia@redsalud.gob.cl; rsprovidencia.ssms@redsalud.gob.cl;

francisca.vinals@gmail.com; myriam.luz.olivares@gmail.com, del día 28 de junio de

2020;

30.- Cadena de correos electrónicos entre Jenifer Quiroz; valentina.ortega@redsalud.gov.cl (sic), valentina.ortega@redsalud.gov.cl (sic), Adriana Alicia Tapia Cifuentes, adriana.tapia@minsal.cl, Marcela Paz Rodriguez Romero,





marcela.rodriguez@minsal.cl, Claudia Eliana Martínez Rojas, Alejandra Barrera, entre el 27 de julio de 2020 y 04 de abril de 2022;

31.- Correo electrónico de Claudia Eliana Martínez Rojas, para Valentina Ortega, valentina.ortega@redsalud.gob.cl, Michelle Cataldo Cares, ocataldoc@udd.cl, oriana.cataldo@redsalud.gov.cl (sic), Karencita Farías, docdocmedicos@gmail.com, equipocovidoccidente@redsalud.gob.cl, Rorobecerra@gmail.com, residencias.psicosocial@gmail.com, residencias.sanitarias@minsal.cl, residenciasanitariaminsal@gmail.com, del día 07 de julio de 2020;

32.- Tabla con indicación de ingresos a residencias sanitarias temporales, con indicación de nombre de la residencia de aislamiento, número de habitación, nombre del paciente, situación covid, fecha de ingreso y egreso;

33.- Cadena de correos electrónicos entre Claudia Eliana Martínez Rojas, gestionredrs@gmail.com, ingresosyaltasrs@gmail.com, francisco.bugueno@redsalud.gob.cl, equiposaludrsnippon@gmail.com, entre el 09 de julio de 2020 y el 14 de julio de 2020;

34.- Tabla con indicación de ingresos a residencias sanitarias temporales, con indicación de nombre de la residencia de aislamiento, número de habitación, nombre del paciente, situación covid, fecha de ingreso y egreso;

35.- Cadena de correos electrónicos entre Claudia Eliana Martínez Rojas, belencorona.contreras@gmail.com, ccgallyas@uc.cl, francisco.bugueno@redsalud.gob.cl, equiposaludrsnippon@gmail.com, camila.gotelli@minsal.cl, gonzalo.judikis@minsal.cl, daniela.osses@minsal.cl, de fecha 23 de julio de 2020;

36.- Tabla con indicación régimen, número de habitación, comuna, nombre del paciente, teléfono, correo electrónico, fecha de ingreso;

37.- Correo electrónico entre Jenifer Quiroz Salinas, Claudia Eliana Martínez Rojas, cmartinr@uc.cl, Valentina Ortega, valentina.ortega@redsalud.gob.cl, Claudio Salinas Morales, claudio.salinas@minsal.cl, Adriana Alicia Tapia Cifuentes, adriana.tapia@minsal.cl, Maria Paz Iturriaga Lisbona, mariapaz.iturriaga@redsalud.gob.cl, Marcela Paz Rodríguez Romero, marcela.rodriguez@minsal.cl, Erik Moreno Rosales, erik.moreno@minsal.cl, de fecha 04 de agosto de 2020;

38.- Tabla con indicación de mes, número de habitación, run, nombre del paciente, fecha de ingreso y egreso;

39.- Correo electrónico de Claudia Elena Martínez Rojas, para german.torresr@redsalud.gob.cl, de fecha 07 de septiembre de 2020;



40.- Tabla con indicación de servicio de salud, residencia de aislamiento, número de habitación, dirección, nombre del paciente, run, situación covid, fecha de ingreso y egreso;

**DÉCIMO QUINTO:** Que, la demandante, con fecha 25 de agosto de 2022, folio 14, del exhorto E-504-2022, del Juzgado de Letras de Limache, rindió prueba testimonial, compareciendo doña **Claudia Eliana Martínez Rojas**, quién previa y legalmente juramentada e interrogada simultáneamente, al tenor de los puntos de prueba Ns° 1 y 3, esto es, si las partes celebraron un contrato de prestación de servicios de residencia sanitaria. En su caso, fecha, términos, modificaciones, y modalidades del mismo; si los servicios que se cobran en la demanda fueron prestados por el demandante en los términos del contrato. Hechos y antecedentes que lo acrediten, expone que: se prestó un servicio de residencia sanitaria, entre el Servicio de Salud y el Hotel Nippón. Señala que fue contratada por el Servicio de Salud Occidente como enfermera matrona el día 13 de abril de 2020, desempeñándose en el Hotel Nippón, que era residencia sanitaria, prestando labores de coordinación como enfermera para los pacientes que ingresaban al hotel, de supervisión a los técnicos en enfermería y de coordinación con los médicos de turno; realizaba controles de enfermería a los residentes, traslados hacia los servicios de urgencia, entregaba altas, y supervisaba el ingreso de insumos clínicos y el uso de éstos.

Declara que el hotel prestaba alojamiento a los pacientes, alimentación tres veces al día, aseo diario de las habitaciones, televisión por cable, uso de baño privado con agua caliente y ducha; a los técnicos de enfermería y a los médicos, con tres alimentaciones diarias cada miembro del equipo, aseo en las habitaciones y uso de televisión.

En cuanto a los pacientes derivados al hotel, señala que eran niños, recién nacidos, puerperas, embarazadas, adultos mayores y adultos; con covid o contacto de covid. Refiere que la ocupación fue disminuyendo a mediados de julio de 2020, por cuanto los pacientes que les correspondía ir al Hotel Nippón fueron derivados a otros hoteles contratados por la Seremi. Agrega que el hotel estuvo casi siempre completo hasta mediados de julio de 2020.

Relata que a mediados de julio de 2020, su jefatura directa de la Seremi, le comunica personalmente que el Hotel Nippón no seguirá prestando servicios, y que se trasladarían a un hotel de Las Condes con los pacientes de la residencia; que debía preparar a los pacientes y que le darían el aviso de esa actividad, por lo que preparó la salida de los pacientes, de los insumos y del personal, el día 23 de julio, mismo día en que se dio aviso a los administradores de la salida.

La testigo señala que no tuvo a la vista el contrato, sólo conoce del acto por indicaciones de su jefatura. En cuanto a las partes del contrato de las que tiene



conocimiento, refiere que son las prestaciones que se debían entregar, alojamiento diario de los pacientes, tres comidas diarias, aseo, entrega de agua embotellada, uso de televisión, alojamiento de los profesionales de salud, con tres comidas diarias.

Que, con fecha 26 de agosto de 2022, folio 73, comparece don **Felipe Andrés Jorge Pardo Alarcón**, quién previa y legalmente juramentado e interrogado simultáneamente, al tenor de los puntos de prueba Ns° 1 y 2, esto es, si las partes celebraron un contrato de prestación de servicios de residencia sanitaria. En su caso, fecha, términos, modificaciones, y modalidades del mismo; y si la demandada pagó todo el precio estipulado en el contrato materia de autos. En su caso, fecha y monto de los pagos, expone que: le comentaron que se celebró un contrato, el cual nunca vio, pero que sabe que se emitieron dos facturas de venta, las cuales no fueron rechazadas por quien emitió el contrato. Señala que se emitieron dos facturas, una de mayo y otra de junio de 2020, y que la factura de mayo fue pagada en marzo de 2021, y la de junio se encuentra pendiente de pago. Indica que no sabe más del contrato, por cuanto solo ve documentos contables; que el monto de la factura de mayo de 2020 es de \$92.000.000 aproximadamente, y la de junio de \$70.000.000, aproximadamente.

En la misma oportunidad, comparece doña **Ingrid Eliana Leiva Jelvez**, quién previa y legalmente juramentada e interrogada simultáneamente, al tenor de los puntos de prueba Ns° 1, 2 y 3, esto es, si las partes celebraron un contrato de prestación de servicios de residencia sanitaria. En su caso, fecha, términos, modificaciones, y modalidades del mismo; si la demandada pagó todo el precio estipulado en el contrato materia de autos. En su caso, fecha y monto de los pagos; y si los servicios que se cobran en la demanda fueron prestados por el demandante en los términos del contrato. Hechos y antecedentes que lo acrediten, expone que: efectivamente hay un contrato entre el Ministerio de Salud y Hotel Nippón por los servicios de hospedaje y alimentación para pacientes covid, el cual fue emitido con fecha 19 de mayo de 2020, sin embargo, los pasajeros ingresaron el día 23 de marzo de 2020. Declara que sucesivo al contrato, había que emitir una orden de compra que iba a respaldar la emisión de la factura por los servicios prestados.

En cuanto al contrato, señala que los servicios que se efectuaban debían ser facturados previa autorización y chequeo del Ministerio. Refiere que el valor del servicio por persona era de \$57.000, más IVA, que incluía el alojamiento, desayuno, almuerzo, once, cena y lavandería. Indica que la demandada pagó la primera factura, de alrededor de \$92.000.000. Luego, señala que se emitió la factura N° 10374, por los servicios de mayo de 2020, por \$75.000.000, aproximadamente, la que no ha sido cancelada a la fecha, quedando un monto pendiente de facturar de \$75.000.000.



Manifiesta que los servicios fueron prestados a conformidad del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Sin embargo, surgió un inconveniente con las habitaciones, aquellas que debían ser singles, fueron ocupadas como dobles o triples, debido a que llegaron familias que no querían separarse, pero que en general todos recibieron los servicios requeridos por el Ministerio de Salud.

Señala que lo anterior lo sabe porque fue gestora del negocio. Indica que tomó contacto con quien estaba a cargo de las residencias sanitarias, el sr. Alexis Flores, luego, una persona del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, quien confirmó los servicios, enviando los primeros pasajeros el día 23 de marzo de 2020. Luego, comenta que tomó contacto con ella, la sra. Jennifer Quiroz, quien se encargaba de la parte administrativa; que el proceso fue lento, y una vez que se llegó a acuerdo con los valores, solicitó la documentación para hacer el contrato.

Relata que luego de dos meses, se firmó el contrato, estando el hotel lleno, se estaban dando los servicios solicitados y que no había respaldo. Indica que una vez firmado el contrato, esperaron la orden de compra y pudieron facturar el mes de marzo, abril y mayo. Luego, refiere que cuando quisieron facturar el mes de junio, ella le enviaba el listado de pasajeros a la sra. Jennifer, produciéndose una dilación debido al tema de las habitaciones las cuales no eran todas singles, sino dobles y triples. Declara que de igual forma se le autorizó a emitir una factura, la cual no ha sido cancelada al hotel.

Declara que solicitó, a través de la Ley del Lobby, reuniones para aclarar la situación, de las cuales tuvieron buena acogida, pero no soluciones. Comenta que en la primera audiencia, los atendió la Dra. Tapia, quien derivó el caso a la sra. Andrea Hidalgo de Finanzas, aunque no logró sacar el pago, pasando el caso a la sección jurídica. Refiere que en jurídica, tuvo otra audiencia, con la sra. Lizzi Calagno, quien solicitó todos los antecedentes que tenían del caso, y que hasta la fecha no han logrado comunicación con ella.

Dispone que el proceso de derivación de pacientes, consistía en un equipo del Servicio de Salud Metropolitano Oriente instalado en el hotel, 24 horas, por 7 días a la semana, encargado de derivar pacientes y darles instrucciones a la recepción de quiénes eran, sus nombres y la forma de distribución, ello por cuanto era imposible que hicieran *check in*. Comenta que dicho equipo ocupaba dos habitaciones, donde estaba la parte de esterilización y atención u oficina, no recuerda bien si se incluía el servicio de alimentación para ellos, pero sí de alojamiento.

Comenta que el contrato lo percibió por sus propios sentidos, por cuanto lo vio por casualidad, dada la contingencia del minuto, no se lo enviaron hasta que ella llamó a un contacto de adquisiciones del Ministerio de Salud para apurar la orden de compra que estaban solicitando, enviando la orden junto al contrato para que pudiese



compararlo. Indica que no recuerda el monto, pero sí que había un máximo estipulado en el contrato.

Para obtener el pago de la primera factura, relata que sus gestiones fueron haber ingresado a Mercado Público, adjuntar la factura para seguir los procesos de cobranza, la factura no fue rechazada por lo que la dio por aceptada, llamando cada cierto tiempo al departamento de pagos, donde le informaban el proceso de la factura. En forma paralela, señala que insistía con Jennifer, Andrea Hidalgo, haciendo un poco de presión, hasta que el pago salió.

En la misma oportunidad, comparece don **Pablo Enrique González Urtubia**, quién previa y legalmente juramentado e interrogado al tenor del punto de prueba N° 1, esto es, si las partes celebraron un contrato de prestación de servicios de residencia sanitaria. En su caso, fecha, términos, modificaciones, y modalidades del mismo, expone que: en una ocasión vio un contrato que había entre Nippón y el Ministerio de Salud, pero que no era de importancia para él porque no influía en su trabajo. Relata que el servicio fue explícito, que era el desayuno, almuerzo, once, cena y el valor de la habitación, que eran de 14 días, y que las habitaciones podían ser singles, dobles y triples porque habían familias completas; que ello lo sabe porque él los recibía y programaba la habitación a las cuales debían ir, además le entregaba datos de los servicios, como las comidas, restaurantes y ama de llaves;

**DÉCIMO SEXTO:** Que, con la finalidad de acreditar sus dichos, la parte demandada acompañó la siguiente prueba documental:

1.- Resolución N° 45/142/2017, de nombramiento de abogado procurador fiscal, respecto de doña Ernestina Ruth Israel Lopez, emitida por el Consejo de Defensa del Estado;

2.- Resolución exenta N° 270, de fecha 19 de mayo de 2020, Santiago, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, aprueba términos de referencia, califica urgencia, autoriza y regulariza recurrir a la modalidad de trato directo para la contratación de un servicio de residencia sanitaria, y aprueba contrato con Hotel Nippón S.A.;

3.- Factura electrónica N° 10374, de fecha 01 de junio de 2020, de Hotel Nippón S.A., para Subsecretaría de Redes Asistenciales, descripción: mes de mayo de 2020, por un valor con IVA de \$75.698.280;

4.- Factura electrónica N° 10370, de fecha 20 de mayo de 2020, de Hotel Nippón S.A., para Subsecretaría de Redes Asistenciales, descripción: meses de mayo y abril de 2020, por un valor con IVA de \$92.791.440;

5.- Orden de facturación N° 132, de fecha 23 de septiembre de 2020, respecto del Hotel Nippón S.A., Rut: 96.587.150-0, por un total bruto de \$156.483.810,



emitido por División Administración de Finanzas, Subsecretaría de Salud Pública, del Ministerio de Salud;

6.- Orden de compra N° 4127-304-SE20, de fecha 19 de mayo de 2020, demandante: Subsecretaría de Redes Asistenciales, Rut: 61.975.700-9, para: Hotel Nippón S.A., Rut: 96.587.150-0, por el servicio código 90111501, 36 habitaciones por 99 noches, por un valor unitario de \$57.000, por un total con IVA de \$241.746.120;

7.- Oficio N° E106257 / 2021, sobre estado de observancia de lo ordenado en oficio N° E88363, de 2021, emitido por la Contraloría General de la República;

8.- Cadena de correos electrónicos de Angélica Castro Zúñiga, María Angélica Castro, Patricia Vidal, Elisa Millanao Gajardo, Guillermo Bertiny Vidal, Andrea Hidalgo Pérez, entre el 28 de diciembre de 2020 y el 30 de diciembre de 2020;

9.- Certificado de egreso, de fecha 05 de julio de 2022, emitido por la Universidad de Chile, respecto de don Mauricio Sebastián Ripetti Silva;

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, son hechos de la causa por así encontrarse acreditados, los siguientes:

1.- Con fecha 11 de mayo de 2020, se suscribió convenio de prestación de servicios de residencia sanitaria, entre el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, representada legalmente por don Arturo Zúñiga Jory; y el Hotel Nippón S.A., sociedad representada legalmente por doña Patricia del Carmen Vidal Benavides.

Que, la cláusula tercera de dicho contrato, establece que, atendida la urgencia con la que el Ministerio de Salud requirió el uso de residencias sanitarias, el Hotel Nippón, dio ejecución a sus obligaciones con anterioridad a la fecha de suscripción del documento, dejando expresa constancia que las prestaciones comenzaron a otorgarse el día 25 de marzo de 2020, y que finalizarían el día 30 de junio de 2020.

La cláusula segunda del documento, estableció que la obligación del Hotel Nippón, sería prestar un servicio integral de residencia sanitaria, que comprendería el uso de habitaciones individuales para cada huésped, independientes, con baño privado; servicio de alimentación a la habitación, que incluía 4 comidas diarias; 4 litros de agua embotellada a la habitación; mucama a diario; cambio de sábanas o toallas diarias; y servicio de lavandería y proporción de productos de aseo personal.

En cuanto el precio del contrato y sus pagos, las partes estipularon que el Ministerio de Salud, pagaría como precio máximo por los servicios de residencia sanitaria, considerando la fecha de inicio de la prestación del servicio y la fecha de término, la suma única y total de \$241.746.120, IVA incluido. El desglose fue señalado en un cuadro explicativo dispuesto en la cláusula cuarta del documento, estableciéndose el ítem, hospedaje de hotel, la cantidad de 36 habitaciones, de valor unitario \$57.000, por un valor total de \$203.148.000, con las condiciones de fecha de



inicio el día 25 de marzo de 2020 y hasta el 30 de junio de 2020. Se incorpora la frase: “pago mensual por el 100% de las habitaciones disponibles”;

2.- Que, con fecha 19 de mayo de 2020, fue dictada resolución exenta N° 270, por don Arturo Zúñiga Jory, Subsecretario de Redes Asistenciales, que aprueba términos de referencia, califica urgencia; autoriza y regulariza recurrir a la modalidad de trato directo para la contratación de un servicio de residencia sanitaria para enfrentar alerta sanitaria decretada por coronavirus 2019 y aprueba contrato correspondiente con Hotel Nippón S.A.

Que, el considerando séptimo de dicha resolución, establece que para efectos de enfrentar debidamente la amenaza por coronavirus, la alerta sanitaria dotó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, de disponer la adquisición directa de bienes, servicios o equipamientos, quedando liberada de los procedimientos de licitación en conformidad al artículo 8° letra c) de la Ley N° 19.886.

Se establece en el considerando décimo, que mediante resolución exenta N° 209, de fecha 25 de marzo de 2020, la Subsecretaría de Salud Pública, fijó el precio máximo de arrendamiento de inmuebles con el objeto de cumplir las medidas para hacer frente al coronavirus, en 0,2 U.F., por metro cuadrado efectivamente utilizado.

Dicha resolución aprueba términos para la contratación del servicio de residencia sanitaria, señalando en un cuadro explicativo el ítem, hospedaje de hotel, la cantidad de 36 habitaciones, de valor unitario \$57.000, por un valor total sin I.V.A., de \$203.148.000, con las condiciones de fecha de inicio el día 25 de marzo de 2020 y hasta el 30 de junio de 2020. Se incorpora la frase: “pago mensual por el 100% de las habitaciones disponibles”.

A su vez, se desglosa el precio calculado, indicándose el valor de la unidad de fomento al día 21 de abril de 2020, en la suma de \$28.664,96; valor mensual m²: 0,2; valor de \$5.733; metraje: 16 m²; total mensual: \$91.728; total diario: \$3.058.

Se establece el valor de los ítems diarios: habitación: \$3.058; alimentación: \$29.000; servicios: \$20.942; lavandería: \$4.000; total diario: \$57.000.

Se indica que el pago se efectuará por cada habitación efectivamente utilizada, y se realizará en 3 cuotas por cada hotel, dentro de un plazo de 30 días desde la recepción conforme de la factura en la Oficina de Egresos del Ministerio de Salud, vía depósito o transferencia bancaria.

Finalmente, en el considerando cuarto de la parte resolutive, se aprueba el contrato de prestación de servicios de residencia sanitaria, suscrito con fecha 11 de mayo de 2020, entre el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y la sociedad denominada Hotel Nippón S.A., Rut: 96.587.150-0, transcribiéndose la totalidad del documento;



3.- Que, con fecha 19 de mayo de 2020, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, Rut: 61.975.700-9, envía orden de compra N° 4127-304-SE20, a la sociedad Hotel Nippón S.A., Rut: 96.587.150-0, con el código 90111504, con las especificaciones de 36 habitaciones por 99 noches, desde marzo a junio por un valor unitario de \$57.000, valor total: \$203.148.000, total con IVA: \$241.746.120;

4.- Que, con fecha 20 de mayo de 2020, la sociedad Hotel Nippón S.A., emite factura electrónica N° 10370, a nombre de Subsecretaría de Redes Asistenciales, con la descripción de servicio de residencia sanitaria para enfrentar alerta por coronavirus, meses de marzo y abril de 2020, según orden de compra N° 4127-304-SE20, por un valor total de \$92.791.440;

5.- Que, con fecha 01 de junio de 2020, la sociedad Hotel Nippón S.A., emite factura electrónica N° 10374, a nombre de Subsecretaría de Redes Asistenciales, con la descripción de servicio de residencia sanitaria para enfrentar alerta por coronavirus, mes de mayo de 2020, según orden de compra N° 4127-304-SE20, por un valor total de \$75.698.280;

6.- Que, con fecha 23 de septiembre de 2023, la División de Administración de Finanzas, de la Subsecretaría de Salud Pública, del Ministerio de Salud, emite orden de facturación N° 132, al proveedor: Hotel Nippón S.A., Rut: 96.587.150-0, por los servicios de residencia sanitaria para enfrentar alerta por coronavirus, modalidad de trato directo, orden de compra N° 4127-304-SE20, resolución que autoriza el contrato: exenta N° 270, orden para cursar el pago: memorándum C14/415, certificado de cumplimiento: memorándum C5/103.

Se desglosan los servicios del 25 de marzo al 30 de abril, por un valor bruto de \$51.143.820; del 01 al 31 de mayo, por un valor bruto de \$66.812.550; y del 01 al 30 de junio de 2020, por un valor bruto de \$38.527.440, todo por un total bruto de \$156.483.810;

7.- Que, doña Patricia Vidal Benavides, en representación de Hotel Nippón S.A., se dirigió a la Contraloría General de la República haciendo presente la demora en el pago de la factura N° 10370 así como el no pago de la N° 10374, requiriéndose informe a la Subsecretaría de Salud Pública, tomando conocimiento el Órgano Contralor y remitiendo copia de la respuesta de la Subsecretaría a la actora;

**DÉCIMO OCTAVO:** Que como se ha señalado anteriormente, Hotel Nippón S.A., interpone demanda de cumplimiento de contrato, solicitando se declare que el Fisco de Chile incumplió el convenio de fecha 11 de mayo de 2020, referente a la prestación de servicios de residencia sanitaria; y que se ordene el pago de la obligación contenida en la factura N° 10374, correspondiente a los servicios prestados en el mes de mayo de 2020, por la suma de \$75.698.280; junto a los servicios





prestados y no facturados por el mes de junio de 2020, por un valor de \$77.261.516, más intereses, reajustes y costas.

Por su parte, el Fisco de Chile, esgrime la aplicación de la resolución exenta N° 209, de fecha 26 de marzo de 2020, de la Subsecretaría de Salud Pública, que establece como precio máximo para el arrendamiento de inmuebles para hacer frente a la pandemia por coronavirus, el monto de 0,2 U.F., por m<sup>2</sup> efectivamente utilizado, negando que el contrato referido haya establecido un monto fijo por los servicios, debiendo procederse al pago una vez recibida a entera conformidad el servicio, y emitida una orden de facturación por parte de la Unidad de Control de Egresos del Ministerio de Salud;

**DÉCIMO NOVENO:** Que, el inciso 1° del artículo 1 de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, dispone: “Los contratos que celebre la Administración del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se ajustarán a las normas y principios del presente cuerpo legal y de su reglamentación. Supletoriamente, se les aplicarán las normas de Derecho Público y, en defecto de aquéllas, las normas del Derecho Privado”.

Por su parte, la letra c) del artículo 8 del mismo cuerpo normativo, señala en lo pertinente: “Procederá la licitación privada o el trato o contratación directa en los casos fundados que a continuación se señalan: c) En casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad contratante, sin perjuicio de las disposiciones especiales para casos de sismos y catástrofes contenidas en la legislación pertinente (...)”.

Atendido el mérito de la acción deducida en autos, cabe señalar que de acuerdo al artículo 1545 del Código Civil, “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. Por su parte, el artículo 1546 del citado cuerpo de leyes dispone que “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”, agregando el artículo 1489 inciso 2° del Código Civil, que en el caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, “podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios”;

**VIGÉSIMO:** Que de la aplicación de la normativa señalada anteriormente, y en conformidad a lo establecido en los hechos de la causa, fluye con claridad que entre el Hotel Nippón S.A. y el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, se celebró un contrato de prestación de servicios de residencia sanitaria regido por la citada Ley N° 19.886, en la modalidad de trato directo, el que



por mutuo acuerdo de las partes comenzó a ejecutarse antes de su escrituración, el día 24 de marzo de 2020 hasta el día 30 de junio de 2020.

La materialización del contrato se realizó el día 11 de mayo de 2020, conforme se puede apreciar del documento signado con el número 01 del considerando décimo cuarto, el cual establece en su cláusula tercera que: "... las partes acuerdan que el pago de las prestaciones ya otorgadas solo podrá efectuarse una vez totalmente tramitada la resolución que autorice esta contratación". Es decir, las partes acordaron que el referido convenio necesitaba su aprobación a través de una resolución exenta, la que finalmente se materializó por medio de la Resolución N° 270, del día 19 de mayo de 2020, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

Dicha resolución, antes de aprobar el referido convenio, determinó en sus considerandos 9 y 10, que atendida la prontitud con la que fue necesario implementar residencias sanitarias, se derivaron pacientes al Hotel Nippón S.A., antes de que se materializara por escrito la contratación correspondiente; y además, estableció que la resolución exenta N° 209, publicada el día 26 de marzo de 2020, de la Subsecretaría de Salud Pública, fijó el precio máximo de arrendamiento de inmuebles, con el objeto de cumplir con las medidas para hacer frente a la pandemia, en 0,2 U.F., por m<sup>2</sup>, efectivamente utilizado.

Lo anterior queda corroborado en la descripción que se realiza en la misma resolución que aprueba el convenio, respecto de la naturaleza del servicio prestado y el desglose del precio acordado por las partes, donde se estipula que se requiere contar con servicios de establecimiento tipo hostel u otros similares, que brinden alojamiento y atención de personas, como máximo a pagar por una utilización del 100% de habitaciones (36 disponibles por el hotel demandante), la suma única y total de \$241.746.120, I.V.A. incluido.

En consecuencia, se colige que el servicio acordado contemplaba que un pasajero ingresara al recinto y utilizara una habitación disponible, descartándose la tesis de pagar el precio máximo estipulado en el contrato, solo por poner a disposición del Ministerio de Salud una habitación del hotel, sin que ésta haya sido efectivamente ocupada;

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que teniendo presente el alcance y precisión de la obligación del servicio de residencia sanitaria arribado por las partes, corresponde el análisis de su cumplimiento.

Al respecto, la prueba aportada por la demandante, referida principalmente a las tablas de elaboración propia, acompañadas en el folio 48, denominadas *rooming list*, que contienen un detalle de las habitaciones utilizadas, el nombre del pasajero, la fecha de entrada y salida de la habitación, y la descripción de si el pasajero es paciente covid-19, resulta insuficiente y escasa, por cuanto se refieren al periodo que



media entre el día 24 al 30 de junio de 2020, impidiendo un análisis completo del tiempo de vigencia del convenio. Además, en dichas tablas se muestran niveles de ocupación de 28 a 33 habitaciones diarias, número que difiere de las 36 que se necesitaban en el contrato, para el pago total del precio convenido.

Por otro lado, se infiere que las tablas enviadas por doña Claudia Eliana Martínez Rojas, acompañadas en el folio 48, corresponden a los reportes periódicos dirigidos al Ministerio de Salud, para llevar un catastro de los espacios disponibles, siendo documentos que contienen información relevante para los efectos de la pandemia, pero en lo que respecta al uso de las habitaciones del hotel, también resultan insuficientes. Dichos documentos señalan la fecha de entrada y salida que tuvo un paciente, sin mencionar si esa persona se encontraba utilizando una sola habitación o si bien la compartía con otros pasajeros. En ese sentido, se hace presente lo declarado por la testigo sra. Leiva Jelvez, quien refirió que al tomar contacto con personal del Ministerio de Salud, hubo una dilación en la facturación de los servicios, debido a que no todas las habitaciones del hotel eran singles, sino dobles y triples. Cabe recordar que el pago del precio se encontraba supeditado a la obligación correlativa de entregar una habitación, y que ésta se haya efectivamente utilizado.

En consecuencia, los antecedentes arribados al expediente no permiten concluir que entre el día 24 de marzo de 2020, al 30 de junio de 2020, se hayan efectivamente utilizado las 36 habitaciones que dispuso el convenio para el pago de la totalidad del precio. En otro aspecto, desconocen los criterios empleados en los memorándums C14/415 y C5/103, aplicados por la Subsecretaría de Salud Pública, para elaborar la orden de facturación N° 132, siendo carga del demandante, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, instar y allegar prueba suficiente para justificar sus alegaciones;

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que respecto del pago de la obligación contraída, resulta pertinente señalar que la Resolución exenta N° 270, del 19 de mayo de 2020, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que aprueba el convenio del día 11 de mayo de 2020, establece en su parte resolutive, en lo referente a los pagos, que: “El pago se efectuará por cada habitación efectivamente utilizada, y se realizará en 3 cuotas por cada hotel, dentro de un plazo de 30 días desde la recepción conforme de la factura en la Oficina de Egresos del Ministerio de Salud, vía deposito o transferencia bancaria.

El pago se cursará por orden del Subsecretario de Redes Asistenciales, previa certificación de cumplimiento, emitida por contraparte técnica ministerial y del Jefe de la División de Atención Primaria”.

De los hechos de la causa ha quedado establecido, que Hotel Nippón S.A., emitió factura electrónica N° 10370, con fecha 20 de mayo de 2020, a nombre de la



demandada, por un monto total bruto de \$92.791.440; y factura electrónica N° 10374, con fecha 01 de junio de 2020, por un monto total bruto de \$75.698.280.

Luego, con fecha 23 de septiembre de 2020, la División Administración y Finanzas, de la Subsecretaría de Salud Pública, del Ministerio de Salud, emitió la orden de facturación N° 132, respecto de los servicios prestados por Hotel Nippón S.A., de conformidad a la orden de compra N° 4127-304-SE20, de fecha 19 de mayo de 2020, dividido en 3 pagos, por un total bruto de \$156.483.810.

Teniendo presente las estipulaciones e instrucciones para proceder al pago de los servicios prestados, contenidas en el convenio de fecha 11 de mayo de 2020, se puede visualizar que la parte demandante, no dio cumplimiento al procedimiento establecido en la cláusula cuarta de dicho documento, toda vez que, antes de obtener la respectiva orden de facturación, se emitieron dos facturas electrónicas por valores determinados por el mismo actor, los que con posterioridad, no coincidieron con los montos entregados en la orden.

Menester resulta señalar, que aun en la hipótesis planteada por el actor, asumiendo que hubo una ocupación total de las habitaciones del hotel durante todo el periodo contratado, la adición de los valores entregados en el escrito de demanda, que corresponderían a: \$92.791.440 por factura N° 10370; \$75.698.280 por factura N° 10374, y \$77.261.516 por eventuales servicios prestados no pagados, superaría el total pactado en el convenio de \$241.746.120, por lo que, teniendo presente que la acción interpuesta sólo corresponde a la de cumplimiento de contrato, no existe proporcionalidad entre el valor demandado y el límite de precio fijado por las partes.

Sin perjuicio de lo expuesto, y considerando que la demandante ha señalado que la factura N° 10370, de fecha 20 de mayo de 2020, por un monto bruto total de \$92.791.440, fue íntegramente pagada; ha quedado establecido y reconocido por el demandado en el escrito dúplica de folio 23, que existe un monto de \$63.692.370, que correspondería al saldo de la orden de facturación N° 132, que no ha sido facturado y pagado, por lo que correspondería acoger parcialmente la demanda sólo por dicho monto.

Ello, sin perjuicio del error de referencia al señalar como monto pendiente la suma de \$63.762.370, puesto que efectuada la operación aritmética el valor corresponde a \$63.692.370 ( $\$156.483.810 - \$92.791.440$ );

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que, atendido el carácter declarativo de la presente sentencia, la suma ordenada pagar por concepto de servicio de residencia sanitaria, lo serán más reajustes de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de notificación del presente fallo e intereses corrientes para operaciones no reajustables desde que se constituya en mora a la demandada;



**VIGÉSIMO CUARTO:** Que, la restante prueba rendida y no pormenorizada en los considerandos precedentes, no altera de modo alguno lo concluido por esta Magistrado;

**VIGÉSIMO QUINTO:** Que, atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil y estimando esta magistrado que las partes han litigado con motivo plausible, cada una soportará sus propias costas.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 1489, 1545, 1546, 1698 y siguientes del Código Civil; artículos 144, 170, 342, 346, 358, 384 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículos 1 y 8 de la Ley N° 19.886; y demás normas pertinentes, se declara que:

**I.-** Que, **se rechazan, sin costas**, las tachas deducidas por el demandado en contra de los testigos sr. Felipe Andrés Jorge Pardo Alarcón y sra. Ingrid Eliana Leiva Jelvez;

**II.-** Que, se acoge parcialmente la demanda deducida por Hotel Nippón S.A., en contra del Fisco de Chile, condenándolo al pago de la suma única y total de \$63.692.370, por concepto de servicios de residencia sanitaria, con los reajustes a intereses que procedan, en la forma establecida en el considerando vigésimo tercero, desestimándose en lo demás.

**III.-** Que, cada parte soportará sus costas.

Notifíquese, dese copia y archívese en su oportunidad.

Notifíquese personalmente o por cédula.

Consúltese si no se apelare.

**C-8951-2021**

Pronunciada por doña **Soledad Araneda Undurraga**, Juez Titular.

Autoriza doña **Ximena del Pilar Andrade Hormazábal**, Secretaria Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. En **Santiago, uno de Septiembre de dos mil veintitrés.-**



C-8951-2021

Foja: 1



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HXMKXHXXLGL